

**2.16. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
(pp. 2-7)**

—

**2.16. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LA COMUNITAT DE MADRID (pp.
8-13)**

ANTONIO FORTES MARTÍN

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad Carlos III de Madrid

En el primer trimestre de 2010 hemos conocido los últimos pronunciamientos judiciales de naturaleza ambiental que se dictaron en el último trimestre del pasado año 2009. Pese a nuestro propósito y compromiso de ofrecer al lector una información lo más actual y exhaustiva posible, lamentamos que en esta primera crónica del nuevo año no podamos dar cuenta de ningún pronunciamiento ambiental del año 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante TSJM) al no aparecer referencia alguna en ninguna de las principales bases de datos jurídicas consultadas. Es por ello que nos centraremos en cómo concluyó el pasado año 2009.

El finalizado año 2009 nos deja, en su último trimestre, un conjunto de cinco pronunciamientos destacables en los ámbitos de la evaluación de impacto ambiental y de tasas por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos.

Comenzando por la evaluación de impacto ambiental, esta materia monopoliza prácticamente toda la labor judicial, de corte ambiental, del TSJM en el período de referencia con el que trabajamos. En este sentido, nos encontramos con cuatro Sentencias de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM, tres de ellas con explotaciones minera de por medio. Los dos primeros de estos pronunciamientos se refieren además al mismo asunto. Nos referimos a la *Sentencia núm 1899/2009, de 21 de octubre* (recurso contencioso-administrativo núm 603/2007) y la *Sentencia núm 1901/2009, de 21 de octubre* (recurso contencioso-administrativo núm 898/2007). En estas dos Sentencias se discute el sometimiento previo, exigido por la Comunidad de Madrid en varias Resoluciones, a una empresa minera al procedimiento ordinario de evaluación ambiental antes de decidir sobre la petición de prórroga (por un período de treinta años) de la concesión de explotación minera de recursos de la Sección C) (sepiolita y bentonita) de la legislación minera de la que la mencionada empresa es titular desde el año 1977.

De acuerdo con la legislación ambiental autonómica, la clave del conflicto resuelto por las Sentencias citadas no es otro que el artículo 5 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid. Atendiendo a lo dispuesto por este precepto, “el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid decidirá, estudiando caso por caso y basándose en los criterios recogidos en el anexo séptimo, si alguno de los planes, programas, proyectos y actividades de los mencionados en los apartados siguientes deben o no deben someterse a un procedimiento ambiental”. Y en concreto el apartado cuarto del artículo 5 recrea que “se someterá a estudio caso por caso cualquier

cambio o ampliación de los proyectos y actividades que figuran en los anexos segundo, tercero y cuarto, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente, es decir cuando impliquen uno o más de los efectos siguientes: a) Incremento de las emisiones a la atmósfera; b) Incremento de los vertidos de aguas residuales; c) Incremento de la generación de residuos; d) Incremento de la utilización de recursos naturales; y e) Afección a áreas incluidas en el anexo sexto”.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, como órgano ambiental autonómico, entiende que la prórroga de la concesión de la explotación original es una ampliación de un proyecto ya existente que además figura en el anexo segundo de la Ley —epígrafe 14.a) y e) relativo a los proyectos mineros— por lo que debe estar sujeta preceptivamente a evaluación ambiental frente a lo que se opone la empresa titular de la concesión argumentando que no hay modificación alguna respecto de la concesión inicialmente otorgada.

Solventando previamente una cuestión no estrictamente ambiental como es la relativa al silencio administrativo positivo esgrimido por la empresa recurrente, el TSJM resuelve contundentemente sosteniendo en el fundamento jurídico tercero que “la situación legislativa en el momento de solicitar la prórroga es muy distinta a la fecha en la que se otorgó la concesión, por lo que en la medida que la prórroga implica una importante ampliación temporal (30 años) de la explotación de recursos de la Sección C: sepiolita y bentonita, con una extensión de 425,78 hectáreas, y con una clara interferencia medioambiental, es clara su subsunción en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley CAM 2/02”.

El problema que subyace en este conflicto sobre el ámbito de aplicación temporal y objetivo de la normativa autonómica de evaluación ambiental es resuelto por el TSJM mediante la desestimación del recurso contencioso-administrativo de la empresa recurrente. Para ello el TSJM esgrime que, como no puede ser de otro modo, un nuevo escenario normativo es el que puede llegar a exigir en el momento actual nuevas prescripciones y determinaciones de obligado cumplimiento para la prórroga del proyecto (como lo es su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental) que, si bien en su formulación inicial, hace más de treinta años, no eran necesarias, en cambio dichas determinaciones legislativas se hacen de obligada observancia al encaminarse en el momento presente “a preservar al máximo un bien

prioritario en la sociedad industrializada en la que nos movemos como es el medio ambiente”.

El tercer pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental lo constituye la *Sentencia núm 1779/2009, de 10 de diciembre* (recurso contencioso-administrativo 430/2007). En esta Sentencia se resuelve el recurso interpuesto por una empresa contra una Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid en la que se sanciona a la recurrente por la comisión de una infracción en materia ambiental. Concretamente, la comisión de la infracción se refiere al incumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA) aprobada para el proyecto de explotación de caliza de la que es titular la empresa recurrente. Dicha infracción aparece tipificada como muy grave por el artículo 58.a) de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de Madrid al disponer “[e]l inicio o ejecución de obras, proyectos, o actividades sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental sin haber obtenido Declaración de Impacto Ambiental positiva o incumpliendo las condiciones establecidas en la misma”.

En el caso de autos los incumplimientos van referidos a la inobservancia de las siguientes condiciones de la DIA: i) instalación de un cerramiento adecuado y eficaz en el perímetro de la explotación, que garantice la integridad física de personas y animales; ii) construcción de una pantalla vegetal para minimizar la visibilidad desde la carretera y proteger a los vehículos de ruido y polvo; iii) mantenimiento de las características edáficas de la tierra vegetal, mediante abonado y semillado con especies leguminosas y protección de su superficie de la invasión de aguas procedentes del exterior por zanjas de desvío perimetrales; y iv) restauración progresiva del terreno alterado por las actividades mineras a medida que el avance de la explotación lo vaya permitiendo mediante estériles procedentes del rechazo de la propia explotación y su planta de tratamiento.

Reduciéndose la presente litis a una cuestión puramente probatoria, la recurrente argumenta que la Dirección General de Industria, Energía y Minas, al aprobar los correspondientes planes de labores y supervisar los trabajos, sin objeción alguna, da por bueno el cumplimiento de las condiciones prescritas para el proyecto minero. Empero, la Sala no comparte ese criterio y sostiene que la simple aprobación y cumplimiento de los planes de labores mineros no exime de la observancia de los requisitos de la DIA ya que “la competencia de la autoridad minera en materia de seguridad de las labores en

modo alguno elimina la competencia de los órganos de protección del medio ambiente en lo que respecta a la adopción de medidas de seguridad tendentes a salvaguardar los valores que configuran su esfera de competencia”.

La última de las cuatro Sentencias referidas en materia de evaluación de impacto ambiental es la *núm 2233/2009, de 23 de diciembre* (recurso contencioso-administrativo núm 611/2008). Su importancia es menor que los otros tres pronunciamientos anteriores dado que en esta ocasión la cuestión relativa a la evaluación de impacto ambiental es un aspecto menor dentro de la litis ventilada ante la instancia del TSJM. Se discute en concreto por parte del Ayuntamiento de La Robla la decisión de la Dirección General de Política Energética y Minas de autorizar a Red Eléctrica de España a la modificación de dos líneas eléctricas ante la solicitud dirigida a su vez por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para dar soporte a las obras de la línea de alta velocidad León-Asturias.

Sin tratarse de la cuestión principal, el Ayuntamiento recurrente argumenta que la decisión es nula por no haber existido declaración de impacto ambiental alguna. La Subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo, y Comercio, que resuelve el recurso de alzada dirigido contra la Resolución inicial de la Dirección General de Política Energética y Minas, considera que el proyecto de modificación del tendido de las dos líneas eléctricas no se encuentra comprendido en ninguno de los dos anexos de la normativa aplicable en materia de evaluación de impacto ambiental. Más bien, la parte actora recrea que tal declaración de impacto ambiental trae causa del tenor del artículo 36 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. Conforme a lo dispuesto en este precepto, “[l]a construcción, explotación, modificación, transmisión y cierre de las instalaciones de transporte contempladas en el artículo 35.1 requerirá autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo” para concretar su apartado segundo que “[p]ara la autorización de instalaciones de transporte de energía eléctrica se requerirá acreditar suficientemente los siguientes extremos: b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente”. Y para el recurrente, esas condiciones son las que aparecían prescritas por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RD Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

Frente al forzado parecer de la Administración demandante, el TSJM resuelve sobre este concreto particular sentenciando que el proyecto de modificación del tendido de la

línea eléctrica no precisaba de declaración de impacto ambiental al no haberse aprobado todavía la citada Ley 6/2001, de 8 de mayo, y no prescribir otra cosa distinta la normativa por entonces aplicable.

Finalmente, el último de los pronunciamientos al que aludimos en esta crónica viene constituido por la *Sentencia núm 1716/2009, de 3 de diciembre* (recurso contencioso-administrativo núm 165/2009). En este fallo no se aborda una cuestión estrictamente ambiental si bien lo que se discute por la Asociación de empresarios de garajes, aparcamientos, estaciones de engrase, lavado, mantenimiento y autoestaciones de Madrid es el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciembre de 2008 por el que se impone la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos y se modifica la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por servicios y actividades relacionados con el medio ambiente.

En puridad, así pues, el litigio se centra en una cuestión eminentemente fiscal o tributaria como es la relativa a la Ordenanza fiscal de las tasas por servicios y actividades relacionadas con el medio ambiente donde queda comprendido el establecimiento de una nueva tasa por el servicio de gestión de residuos urbanos (la ecotasa o tasa de basuras) con una reminiscencia indirecta en materia ambiental.

A lo largo de todo el pronunciamiento no se aborda la cuestión relativa, ni siquiera, al hecho imponible sino más bien toda la controversia queda reducida a la excesiva y decisiva incidencia, a juicio de la parte actora, que el valor catastral de los inmuebles tiene en la determinación final de la cuota tributaria a satisfacer, ya que su configuración en la Ordenanza fiscal aprobada permite considerar la tasa de basuras como un complemento o recargo sobre el impuesto de bienes inmuebles.

El TSJM se ve en la tesitura de abordar el examen de los principios de igualdad, progresividad, y sobre todo, equivalencia entre el coste del servicio y el importe de la tasa. A juicio del TSJM, con apoyo en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, no es desajustado a los principios que rigen las tasas “la cuantificación de la cuota en virtud del criterio único de la capacidad económica del contribuyente determinada por el valor catastral de los bienes inmuebles”. Es más, se ha declarado inequívocamente el empleo válido de ese parámetro en relación, por ejemplo, con la tasa de alcantarillado. Por ello, y como quiera que existen diversos sistemas válidos para el cálculo de la cuota de las tasas, siempre y cuando los mismos se adecuen a las previsiones del artículo 24

de la Ley de Haciendas Locales y respeten también los principios generales y constitucionales, el TSJM resuelve con declarar la conformidad a Derecho del sistema empleado por la Ordenanza recurrida estableciendo de este modo las tarifas en función del valor catastral de los inmuebles con el método de corrección consistente en la cuota de generación de residuos para determinados establecimientos. Ello, como afirma el TSJM, como con toda evidencia y en un servicio como el de recogida de basuras y en una ciudad como Madrid donde resulta “imposible materialmente individualizar la cuota de la tasa si se pretende que coincida rigurosamente con la utilidad económica que para cada contribuyente supone el servicio”.

En el primer trimestre de 2010 hem conegut els últims pronunciaments judicials de caràcter ambiental que es van dictar en l'últim trimestre de l'any 2009. Malgrat el nostre propòsit i compromís d'oferir al lector una informació com més actual i exhaustiva millor, lamentem que en aquesta primera crònica del nou any no puguem donar compte de cap pronunciament ambiental de l'any 2010 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (en endavant TSJM), ja que no apareix cap referència en cap de les principals bases de dades jurídiques que hem consultat. És per això que ens centrarem en la manera com va concloure l'any 2009.

El ja finalitzat any 2009 ens ha deixat, en el seu últim trimestre, un conjunt de cinc pronunciaments destacables en els àmbits de l'avaluació d'impacte ambiental i de les taxes per prestació del servei de gestió de residus urbans.

Començant per l'avaluació d'impacte ambiental, aquesta matèria monopolitza pràcticament tota la tasca judicial, de caràcter ambiental, del TSJM en el període esmentat amb què treballem. En aquest sentit, ens trobem amb quatre sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJM, tres de les quals amb explotacions mineres pel mig. Els dos primers pronunciaments fan referència, a més a més, al mateix afer. Ens referim a la *Sentència núm. 1899/2009, de 21 d'octubre* (recurs contenciós administratiu núm. 603/2007) i a la *Sentència núm. 1901/2009, de 21 d'octubre* (recurs contenciós administratiu núm. 898/2007). En aquestes dues sentències es discuteix el sotmetiment previ, exigít per la Comunitat de Madrid en diferents resolucions, a una empresa minera al procediment ordinari d'avaluació ambiental abans de decidir sobre la petició de pròrroga (per un període de trenta anys) de la concessió d'explotació minera de recursos de la Secció C) (sepiolita i bentonita) de la legislació minera de què l'esmentada empresa és titular des de l'any 1977.

D'acord amb la legislació ambiental autonòmica, la clau del conflicte resolt per les sentències esmentades no és cap altre que l'article 5 de la Llei 2/2002, de 19 de juny, d'avaluació ambiental de la Comunitat de Madrid. Atenent el que disposa aquest precepte, "l'òrgan ambiental de la Comunitat de Madrid ha de decidir, estudiant cas per cas i basant-se en els criteris que recull l'annex setè, si algun dels plans, programes, projectes i activitats dels que s'han esmentat en els apartats següents han de sotmetre's o no a cap procediment ambiental". I en concret, l'apartat 4t de l'article 5 diu que "s'ha de sotmetre a estudi cas per cas qualsevol canvi o ampliació dels projectes i de les activitats que figuren en els annexos segon, tercer i quart, ja autoritzats, executats, o en

procés d'execució, que puguin repercutir sobre el medi ambient, és a dir, quan impliquin un o més dels efectes següents: a) Increment de les emissions a l'atmosfera; b) Increment dels abocaments d'aigües residuals; c) Increment de la generació de residus; d) Increment de la utilització de recursos naturals; e) Afecció a àrees incloses en l'annex sisè”.

La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, com a òrgan ambiental autonòmic, considera que la pròrroga de la concessió de l'explotació original és una ampliació d'un projecte ja existent que a més a més figura en l'annex 2n de la llei — epígraf 14.a) i e) relatiu als projectes miners—, per això ha d'estar subjecta preceptivament a avaluació ambiental, cosa a la qual s'oposa l'empresa titular de la concessió, argumentant que no hi ha cap modificació respecte de la concessió inicialment atorgada.

solucionant prèviament una qüestió no estrictament ambiental com és la relativa al silenci administratiu positiu esgrimit per l'empresa recurrent, el TSJM resol contundentment basant-se en el fonament jurídic tercer que “la situació legislativa en el moment de sol·licitar la pròrroga és diferent de la data en què es va atorgar la concessió, per la qual cosa en la mesura que la pròrroga implica una ampliació temporal important (30 anys) de l'explotació de recursos de la Secció C: sepiolita i bentonita, amb una extensió de 425,78 hectàrees, i amb una clara interferència mediambiental, la seva subsumció en l'apartat 4 de l'article 5 de la Llei CAM 2/02 és evident”.

El problema que subjeu en aquest conflicte sobre l'àmbit d'aplicació temporal i objectiu de la normativa autonòmica d'avaluació ambiental el resol el TSJM mitjançant la desestimació del recurs contenciós administratiu de l'empresa recurrent. Per això, el TSJM esgrimeix que, com no pot ser de cap altra manera, el nou escenari normatiu és el que pot arribar a exigir en el moment actual noves prescripcions i determinacions de compliment obligatori per a la pròrroga del projecte (com és el seu sotmetiment al procediment d'avaluació d'impacte ambiental). Si bé en la formulació inicial, aquestes determinacions legislatives fa més de trenta anys eren necessàries, en canvi es fan d'obligada observança en encaminar-se cap al moment present “a preservar al màxim un bé prioritari en la societat industrialitzada en la qual ens movem, com és el medi ambient”.

El tercer pronunciament en matèria d'avaluació d'impacte ambiental el constitueix la *Sentència núm 1779/2009, de 10 de desembre* (recurs contenciós administratiu 430/2007). En aquesta sentència es resol el recurs interposat per una empresa contra una ordre de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid en la qual se sanciona la recurrent per haver comès una infracció en matèria ambiental. Concretament, la comissió de la infracció fa referència a l'incompliment de les condicions de la declaració d'impacte ambiental (en endavant DIA) aprovada per al projecte d'explotació de calcària de la qual és titular l'empresa recurrent. La infracció apareix tipificada com a molt greu per l'article 58.a) de la Llei 2/2002, de 19 de juny, d'avaluació ambiental de Madrid, en disposar que “[l]’inici o l’execució d’obres, projectes, o activitats subjectes a avaluació d’impacte ambiental sense haver obtingut la declaració d’impacte ambiental positiva o incomplint les condicions establertes.”

En el cas de les interlocutòries, els incompliments es refereixen a la inobservança de les següents condicions de la DIA: i) Instal·lació d'un tancament adequat i eficaç al perímetre de l'explotació que garanteixi la integritat física de les persones i els animals”; ii) Construcció d'una pantalla vegetal per minimitzar la visibilitat des de la carretera i protegir els vehicles de soroll i pols; iii) Manteniment de les característiques edàfiques de la terra vegetal, mitjançant la sembra d'espècies lleguminoses i l'abonament, i la protecció de la seva superfície de la invasió d'aigües procedents de l'exterior per rases de desviació perimetrals; iv) Restauració progressiva del terreny alterat per les activitats mineres a mesura que l'avanç de l'explotació ho vagi permetent mitjançant estèrils procedents del rebuig de la pròpia explotació i la seva planta de tractament.

Com que aquest litigi es redueix a una qüestió purament probatòria, la recurrent argumenta que la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, en aprovar els corresponents plans de tasques i supervisar els treballs, sense cap objecció, dona per bo el compliment de les condicions prescrites per al projecte miner. Emperò, la Sala no comparteix aquest criteri i sosté que la simple aprovació i el compliment dels plans de feines mineres no eximeix de l'observança dels requisits de la DIA, ja que “la competència de l'autoritat minera en matèria de seguretat de les tasques no elimina de cap manera la competència dels òrgans de protecció del medi ambient pel que fa a l'adopció de mesures de seguretat tendents a salvaguardar els valors que en configuren l'esfera de competència”.

L'última de les quatre sentències que fan referència a l'avaluació d'impacte ambiental és la *núm. 2233/2009, de 23 de desembre* (recurs contenciós administratiu núm. 611/2008). La seva importància és menor que la dels altres tres pronunciaments anteriors, atès que en aquesta ocasió la qüestió relativa a l'avaluació d'impacte ambiental és un aspecte menor en el litigi ventilat davant la instància del TSJM. Concretament, l'Ajuntament de La Robla discuteix la decisió de la Direcció General de Política Energètica i Mines d'autoritzar Xarxa Elèctrica d'Espanya a modificar dues línies elèctriques davant la sol·licitud dirigida al seu torn per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) per donar suport a les obres de la línia d'alta velocitat Lleó-Astúries.

Sense tractar-se de la qüestió principal, l'Ajuntament recurrent argumenta que la decisió és nul·la perquè no hi ha cap declaració d'impacte ambiental. La Sotssecretaria del Ministeri d'Indústria, Turisme, i Comerç, que resol el recurs d'alçada dirigit contra la resolució inicial de la Direcció General de Política Energètica i Mines, considera que el projecte de modificació de l'estès de les dues línies elèctriques no es troba en cap dels dos annexos de la normativa aplicable en matèria d'avaluació d'impacte ambiental. Més aviat, la part actora recrea que aquesta declaració d'impacte ambiental porta causa del tenor de l'article 36 de la Llei 54/97, de 27 de novembre, del sector elèctric. D'acord amb el que disposa aquest precepte, “[l]a construcció, l'explotació, la modificació, la transmissió i el tancament de les instal·lacions de transport previstes per l'article 35.1 han de requerir autorització administrativa prèvia en els termes que estableix aquesta llei i les seves disposicions”. I l'apartat segon especifica que “[p]er a l'autorització d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica cal acreditar els punts següents: b) El compliment de les condicions de protecció del medi ambient.” I per al recurrent, aquestes condicions són les que prescriu la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del RD legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental.

Davant de l'opinió forçada de l'Administració demandant, el TSJM, pel que fa a aquest concret particular, va sentenciar que el projecte de modificació de l'estès de la línia elèctrica no necessitava cap declaració d'impacte ambiental, ja que la Llei 6/2001, de 8 de maig, encara no s'havia aprovat i la normativa llavors aplicable no preescrivia res de diferent.

Finalment, l'últim dels pronunciaments a què al·ludim en aquesta crònica és la *Sentència núm. 1716/2009, de 3 de desembre* (recurs contenciós administratiu núm.

165/2009). En aquesta resolució no s'aborda cap qüestió estrictament ambiental, si bé el que discuteix l'Associació d'Empresaris de Garatges, Aparcaments, Estacions de Greixatge, Rentat, Manteniment i Autoestacions de Madrid és l'acord del Ple de l'Ajuntament de Madrid de 22 de desembre de 2008, pel qual s'imposa la taxa de prestació del servei de gestió de residus urbans i es modifica l'ordenança fiscal reguladora de les taxes d'activitats i serveis relacionats amb el medi ambient.

Clar i català, així, doncs, el litigi se centra en una qüestió eminentment fiscal o tributària com és la relativa a l'ordenança fiscal de les taxes d'activitats i serveis relacionats amb el medi ambient, en què es regula l'establiment d'una nova taxa del servei de gestió de residus urbans (l'ecotaxa o taxa d'escombraries) amb reminiscència indirecta en matèria ambiental.

Al llarg de tot el pronunciament ni tan sols s'aborda la qüestió relativa al fet imposable, sinó que, més aviat, tota la controvèrsia es redueix a la incidència excessiva i decisiva, segons el parer de la part actora, que el valor cadastral dels immobles té en la determinació final de la quota tributària que cal satisfer, ja que la seva configuració en l'ordenança fiscal aprovada permet considerar la taxa d'escombraries com un complement o recàrrec sobre l'impost de béns immobles.

El TSJM es veu en la tessitura d'abordar l'examen dels principis d'igualtat, progressivitat i, sobretot, equivalència entre el cost del servei i l'import de la taxa. Segons el parer del TSJM, basant-se en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, "la quantificació de la quota en virtut del criteri únic de la capacitat econòmica del contribuent determinada pel valor cadastral dels béns immobles" no és desajustada als principis que regeixen les taxes. És més, inequívocament s'ha declarat l'ús vàlid d'aquest paràmetre amb relació a la taxa de clavegueram, per exemple. Per això, i com que hi ha diferents sistemes vàlids per calcular la quota de les taxes, sempre que s'adeqüin a les previsions de l'article 24 de la llei d'hisendes locals i respectin els principis generals i constitucionals, el TSJM resol declarar que el sistema emprat per l'ordenança recorreguda sigui d'acord amb el dret, i estableix, d'aquesta manera, les tarifes en funció del valor cadastral dels immobles amb el mètode de correcció consistent en la quota de generació de residus per a determinats establiments. Tot això, com afirma el TSJM, com en tota evidència i en un servei com el de recollida d'escombraries i en una ciutat com Madrid, on resulta "impossible materialment

individualitzar la quota de la taxa si es pretén que coincideixi rigorosament amb la utilitat econòmica que suposa el servei per a cada contribuent”.